

E

Editorial

Combate a la nueva criminalidad local

El Ministerio Público y las policías tienen un gran desafío por delante para mantener a raya a los nuevos fenómenos delictuales.

La cuenta pública entregada el viernes pasado por la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, ha confirmado con datos duros una realidad que la ciudadanía percibe con creciente inquietud: la crisis de seguridad que afecta al país se ha instalado con fuerza en la Región de Los Lagos. El indicador más alarmante es el drástico incremento en la tasa de homicidios, que en el último período anual se duplicó, pasando de 16 a 33 casos consumados. Esta estadística refleja el actual estado delictual en la zona, evidenciando una violencia letal y una presencia de crimen organizado que rompe con la tranquilidad tradicional del sur.

No obstante, sería un error interpretar este escenario como un fenómeno súbito. Las primeras señales de alerta se encendieron hace algunos años, cuando las investigaciones policiales destaparon la operación de una célula local del Tren de Aragua en Puerto Montt. Aquel hallazgo, centrado entonces en la trata de personas con fines de explotación sexual, constituyó el aviso temprano de que las estructuras criminales transnacionales habían fijado sus ojos en esta región para expandir sus tentáculos y diversificar sus negocios ilícitos.

Si bien el balance de la Fiscalía exhibe éxitos investigativos indeliberables —como la reciente desarticulación de la banda “Hermanos Cartier” y eficiencia en la judicialización superior al promedio nacional—, es evidente que el esfuerzo debe persistir e intensificarse. Puerto Montt se ha consolidado como un nodo logístico estratégico hacia el sur austral, una condición geográfica clave que es utilizada por estas redes para el tráfico de drogas. El aumento sostenido en los decomisos confirma que la región es una plaza activa y en disputa, lo que obliga al Estado a no ceder espacios.

En este contexto, y considerando la efectividad demostrada por el Ministerio Público local, la responsabilidad recae ahora en el próximo gobierno. Resulta imperativo dotar a la Fiscalía y a las policías de mayores recursos operativos. Sin embargo, la prioridad debe estar en fortalecer la labor de inteligencia. Enfrentar a organizaciones complejas requiere tecnología avanzada y análisis financiero capaz de anticiparse a las maniobras de grupos que operan con altos recursos. Sólo con inteligencia de calidad se podrá frenar el avance de esta nueva criminalidad.